



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
**Magistrada Ponente**

**REFERENCIA:** PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**  
**RADICACIÓN:** 05 001 31 05 **016 2019 00092 02**  
**DEMANDANTE:** DORA DEL SOCORRO RÍOS (QEPD)  
**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Medellín, once (11) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada y surtir el grado jurisdiccional de consulta en su favor, respecto de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020, por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín.

**I. ANTECEDENTES**

Pretendió la demandante que se condene a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Evelio de Jesús Londoño Pérez, a partir del 3 de septiembre de 1993 de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación (págs. 1, 4 arch. 5 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que el 12 de julio de 1967 contrajo matrimonio por el rito católico con Evelio de Jesús Londoño Pérez, con quien convivió compartiendo techo, lecho y mesa en forma ininterrumpida

hasta el día del fallecimiento de su esposo; de dicha unión se procrearon 3 hijos de nombre John Mario, Carlos Alberto y Dora Elena Londoño Ríos, quienes eran mayores de edad a la fecha del deceso del causante; su esposo falleció el 3 de septiembre de 1993, data para la cual era afiliado del extinto ISS y cotizó 395,14 semanas en toda su vida laboral desde el 7 de marzo de 1986; solicitó la pensión de sobrevivientes al extinto ISS, sin embargo, debido a los quebrantos en su salud decidió desistir del trámite administrativo, por lo que la demandada ordenó el archivo del expediente mediante Auto n° 08736 del 30 de noviembre de 2011.

Agregó que posteriormente, por encontrar que reúne los requisitos, nuevamente solicitó el reconocimiento de la prestación, pero la misma le fue negada en Resolución n.º GNR107857 del 18 de abril de 2016 bajo el argumento de no existir convivencia entre los cónyuges al momento del deceso, decisión que fue confirmada en Resoluciones n.º GNR 214446 del 19 de julio de 2016 y VPB 33005 del 22 de agosto de 2016, para lo cual explicó la entidad que se demostró que el causante abandonó el hogar en 1975 y que si bien para la fecha del deceso hubo convivencia, esta no se dio como pareja; no obstante, desconoce la entidad que aun cuando fue cierto el abandono, este *«se produjo sin justa causa, pues el señor Evelio de Jesús se entregó al licor y a las mujeres de la calle, sin convivir de manera efectiva con ninguna de ellas. De otro lado, la demandada tampoco tuvo en cuenta que, en los dos últimos años de su vida, el señor Londoño Pérez regresó a su hogar, conformado por sus hijos y su esposa, es decir, que para la fecha del deceso sí existió convivencia entre la pareja»* (págs. 1, 2 arch. 5 C01).

## II. TRÁMITE PROCESAL

La demanda inicialmente fue conocida por el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín, quien le asignó el radicado 2017 00578 y la admitió mediante auto del 1º de septiembre de 2017 ordenándose la notificación y traslado a la parte demandada (archs. 3, 7 C01), entidad que contestó oponiéndose a las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó la causación del derecho prestacional que se reclama. Propusieron como excepciones las denominadas inexistencia de la obligación, improcedencia de los intereses moratorios, compensación indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, descuento del retroactivo por salud (archs. 12, 15 C01).

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardó silencio a pesar de haber sido enterada de la existencia del presente proceso (arch. 10 C01).

El apoderado de la demandante puso en conocimiento que, su poderdante falleció el 13 de abril de 2018 (arch. 20 C01).

En proveído del 12 de febrero de 2019 la Jueza 23 Laboral del Circuito de Medellín, se declaró impedida debido a que tiene una demanda en contra de Colpensiones, Porvenir SA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con radicado 05001310500520190006500, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial de Reparto, dependencia que lo asignó al Juzgado 16 Laboral del mismo circuito judicial, quien por auto del 27 de marzo de 2018 avocó el conocimiento del proceso (archs. 2, 22, 23 C01)

### **III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 3 de septiembre de 2020, declaró que la demandante causó en su favor la pensión de sobrevivientes, generada por el fallecimiento de Evelio de Jesús Londoño Pérez; en consecuencia, condenó a la demandada a pagarle dicha prestación a partir del 3 de septiembre de 1993 en cuantía de 1 SMLMV, cuyo retroactivo asciende a \$26.277.391 calculado entre el 18 de abril de 2013 y el 13 de abril de 2018 (fecha del fallecimiento de la demandante) a razón de 14 mesadas, que ordenó pagar en forma indexada al momento de su pago en favor de la masa sucesoral de la demandante, con la autorización de descontar lo atinente a los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud; declaró parcialmente probada tanto la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de abril de 2013, como la improcedencia de los intereses moratorios y no probados los demás medios exceptivos; impuso costas a cargo de la demandada.

Para lo que interesa a la alzada, motivó la decisión en que la norma aplicable al caso es el Acuerdo 049 de 1990 con la cual encontró que el causante completó las semanas exigidas y no se discutió que la demandante era casada con aquél, ni tenía separación legal y definitiva de cuerpos y bienes, aunado a que quedó probado que sí convivió con él hasta 1975 cuando hubo una separación y ella tuvo hijos con otra persona, pero luego, regresó

nuevamente a vivir con Evelio hasta el momento de su fallecimiento, independientemente de que hubiera sido como pareja o no, porque se probó que volvieron a convivir para que la demandante cuidara al causante en sus últimos días de vida.

Agregó que la norma aplicable no exige un período mínimo de convivencia para la cónyuge como sí se hace para la compañera, máxime cuando en tratándose de un afiliado, no se requiere que haya convivencia, sino que pertenezca al grupo familiar. Indicó que al ser una prestación del RPMPD, es posible su reconocimiento post mortem, por lo que ordenó que el retroactivo fuera girado a la masa sucesoral de la demandante. Para declarar prescritas las mesadas, tuvo en cuenta la petición del 18 de abril de 2016.

Finalmente dispuso que, al tenor del art. 15 del Decreto 806 de 2020 el demandado tenía 5 días para sustentar por escrito el recurso interpuesto en audiencia contra la sentencia, así que una vez la demandada allegó el correspondiente memorial, concedió la apelación en el efecto suspensivo en los términos del auto proferido el 17 de noviembre de 2020 (archs. 28-33 C01).

No obstante lo anterior, esta Colegiatura mediante proveído del 29 de enero de 2021 ordenó la devolución del expediente con el fin de que el *a quo* recepcionara la sustentación de la apelación interpuesta contra la sentencia, en forma oral (arch. 2 C02).

#### **IV. RECURSO DE APELACIÓN**

En audiencia del 9 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo ordenado por el superior, la demandada argumentó que la demandante no desvirtuó lo que Colpensiones encontró en la investigación administrativa pues allí confesó que aunque solo vivió con el causante los últimos 2 años previos a su fallecimiento, tal convivencia no se dio como pareja y que su aporte era muy poco, aunado a que se presentan incongruencias tanto en las declaraciones de los testigos rendidos en juicio, señores María Marleny Durango Holguin y Luis Carlos Durango Holguin, como en lo manifestado en las declaraciones extraprocesales por Resfa de Jesús Arenas González y Abel de Jesús Betancourt Zapata; por tanto concluye que la demandante abandonó el hogar, desarrolló un nuevo proyecto de vida con otra pareja al tener 3 hijos fuera del matrimonio y al final de la vida del causante, solo fue su cuidadora, lo que

conlleve a revocar la sentencia (archs. 36-38 C01).

## V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 21 de abril de 2023 se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, quienes presentaron alegaciones insistiendo en los argumentos expuestos en demanda, contestación y apelación (archs. 3-5 C03).

## VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación de la demandada y a surtir el grado jurisdiccional de consulta en su favor, y de conformidad con lo previsto en los arts. 66A y 69 del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si hay lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante hoy fallecida, con ocasión del deceso de Evelio de Jesús Londoño Pérez (QEPD).

**Pensión de sobrevivientes.-** Colpensiones negó esta prestación mediante Resoluciones n.º GNR107857 y GNR214446 de 2016, tras considerar que no existió convivencia entre Dora del Socorro y Evelio de Jesús al tenor de lo dispuesto en los arts. 25 a 30 del Acuerdo 049 de 1990, que inicialmente aplicó bajo el argumento de que el causante falleció en vigencia de dicha normativa, quien además, según declaraciones rendidas en vía administrativa abandonó el hogar en el año 1975 y en todo caso, la peticionaria manifestó que hubo varias separaciones y que en los últimos 2 años vivieron pero no a título de pareja; decisión que fue confirmada en la Resolución n.º VPB 33005 de 2016 en la que se estudió el derecho con base en el art. 47 de la ley 100 de 1993 y la Circular n.º 01 de 2012, sin que la demandante acreditara su calidad de beneficiaria pues *«no puede concluirse que la interesada hubiere mantenido una relación de socorro y asistencia mutua»* (págs. 75-84 arch. 6 C01).

En punto de procedencia, ha de advertir la Sala que, en materia de pensión de sobrevivientes, tiene definido la jurisprudencia ordinaria laboral, como principio general, que la norma aplicable para resolver la procedencia de este derecho pensional, es la vigente al momento del fallecimiento del

pensionado o afiliado (CSJ SL17521-2016, CSJ SL15873-2017 y CSJ SL1362-2019, entre otras).

En el caso que nos ocupa, se tiene que como el deceso del causante Evelio de Jesús Londoño Pérez, ocurrió el 3 de septiembre de 1993 (págs. 1, 2, 16-23 arch. 6, págs.. 19, 20 arch. 27.1 C01), la normativa aplicable no es la Ley 100 que se expidió el 23 de diciembre de 1993 y cuyo sistema pensional entró a regir el 1º de abril de 1994, sino el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, que establece en sus arts. 6º, 25 a 30, que tienen derecho a esta prestación los miembros del grupo familiar del afiliado que hubiere cotizado al sistema, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la fecha del deceso o 300 semanas, en cualquier época; y dispone que son beneficiarios de la prestación, entre otros, en forma vitalicia la cónyuge o compañera permanente superviviente; y los hijos menores de 18 años y los incapacitados por razón de sus estudios, si demuestran que dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, y los estudiantes aprueben el respectivo período escolar y no cambien o inicien nueva carrera o profesión por razones distintas de salud.

También se dispone que se perderá el derecho a la prestación, entre otros casos, cuando la cónyuge en el momento del deceso no hiciera vida en común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o compañía.

Se precisa que, en el marco del Acuerdo 049 de 1990, en tratándose de cónyuges o compañeros(as) permanentes, la convivencia efectiva, real y material entre la pareja a la fecha del deceso, constituye un elemento fundamental para el acceso al derecho pensional, pues ello permite establecer la existencia de una comunidad de vida estable, donde los involucrados crean relaciones de afecto, respeto y ayuda mutua y determina la existencia del grupo familiar que requiere de protección ante la pérdida del esposo(a) o compañero(a), con la advertencia de que la procreación de hijos comunes no exime de la carga de acreditar la convivencia al momento del fallecimiento (CSJ SL2085-2023, CSJ SL476-2022, CSJ SL5677-2021, CSJ SL1744-2021 y CSJ SL5617-2019).

De conformidad con el material probatorio, se tiene que el causante para el momento de su deceso era afiliado activo del sistema general de pensiones, como trabajador dependiente de Industria de Frío Ltda, quien venía efectuando cotizaciones a su favor de manera ininterrumpida desde el 7 de marzo de 1986, motivo por el cual, logró completar en toda su vida laboral 395,14 semanas (págs. 45-47, 69-72 archs. 6, 14, 19 C01); por tanto, superó la densidad mínima de aportes exigidos por la normativa en cita, dejando con ello, causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para quienes acreditaran ser beneficiarios de esta.

Respecto a la calidad de cónyuge alegada por la demandante Dora del Socorro Ríos (QEPD), se aportaron registros civiles de matrimonio, en los que consta que contrajo matrimonio por el rito católico con el causante, el 12 de julio de 1967 (págs. 3, 4, 31 arch. 6, pág. 21, 22 arch. 27.1 C01) el cual aun cuando fue inscrito el 19 de noviembre de 2009 y protocolizado el 4 de marzo de 2016 mediante Escritura Pública 480 de la Notaría 8a, no es viable desconocer el acto jurídico del matrimonio, pues tiene plena validez a partir de su celebración de conformidad con el art. 115 del CC, aunado a que tal atributo no fue discutido por las partes<sup>1</sup>.

Se acreditó en forma idónea que, de dicha unión nacieron John Mario, Carlos Alberto y Dora Elena Londoño Ríos el 22 de junio de 1968, el 24 de mayo de 1969 y el 28 de febrero de 1972, respectivamente, el primero en Itagüí y los 2 últimos en Yalí, Antioquia (págs. 8-10 arch. 6, págs.. 23-28 arch. 27.1 C01), por lo tanto, para la fecha del deceso del padre causante, tenían en su orden 25, 24 y 21 años de edad.

Ahora, en lo que tiene que ver con la convivencia efectiva, real y material de la demandante con el causante, se aportaron pruebas recaudadas en vía administrativa por el extinto ISS y luego por Colpensiones, y las recepcionadas en juicio por el *a quo*, sin embargo, existen serias contradicciones entre todas estas, que no permiten concluir a la Sala que, en verdad, se dio tal aspecto:

Obra declaración extrajuicio rendida el 16 de agosto de 2006 por José Adán Ramírez Vallejo y Sorelly del Socorro Toro Quintero ante la Notaría 2ª del

---

<sup>1</sup> Cfr. CSJ SL 2721-2022, respecto a que si bien «los matrimonios celebrados a partir de la vigencia de la Ley 92 de 1938 y hasta el 5 de agosto de 1970 se comprueban con el registro civil o las actas eclesiásticas, mientras que aquellos oficializados con posterioridad a esta última fecha, únicamente con el registro civil. No obstante, dicho escenario admite una salvedad, que se da cuando el hecho objeto de prueba solemne no es controvertido en juicio y admitido por las partes, evento en el que resulta innecesario allegar el documento establecido por la ley para su acreditación».

Círculo de Itagüí, Antioquia en la que indicaron que viven en la Cra 57 n° 40-173 y por motivos de *amistad y vecindad* les consta que la pareja Londoño Ríos estuvo casada por más de 24 años y tuvo 3 hijos ya emancipados, sin que tengan conocimiento de otros hijos adoptivos (págs. 24 arch. 6 C01). En este documento no se indicaron los nombres de esos 3 hijos.

La demandante efectuó una declaración extrajuicio el 28 de abril de 2010 en la misma notaría, donde indicó que vivía en el barrio Santa María La Nueva; y a pesar de afirmar que se casó con Evelio Londoño, señaló que no había procreado hijos y que su esposo no tenía hijos legítimos. Sin embargo, más adelante nombró como hijos a John Jaime, Ángela María, Noralba, Hernán Darío y Mario Alberto (pág. 25 arch. 6 C01).

Como consecuencia de la solicitud elevada por la demandante el 12 de mayo de 2010 para el reconocimiento pensional, el extinto ISS ordenó abrir una investigación administrativa mediante auto n° 99872 del 10 de noviembre de 2010, dentro de la cual la demandante declaró el 16 de mayo de 2011 que nunca conoció la familia de su esposo, con quien según su dicho convivió ininterrumpidamente en Itagüí desde que se casaron y quien respondía por ella económicamente por ser ama de casa; informó que el causante no tuvo hijos y a la data de su fallecimiento el estado civil de él era soltero al igual que ella, y además tuvo 3 hijos: Fabián Sneider, Sandro León y Orley Andrés Ramírez Ríos, quienes para la época de la declaración dijo, que contaban con más de 33 años de edad, sin embargo señaló que nunca convivió con el padre de sus hijos, cuyo nombre es José Adán Ramírez Vallejo. Indicó que Evelio falleció el 1° [sic] de septiembre de 1993 debido al licor. El expediente fue ordenado archivar en auto n.º 08736 del 30 de noviembre de 2011, debido a que la demandante presentó desistimiento de la solicitud (págs. 48-68 ach. 6 C01).

Nótese en este punto que, José Adán Ramírez Vallejo en la declaración extrajuicio que rindió desconoció que tuvo hijos con la demandante, quien manifestó el 16 de mayo de 2011 que el padre de sus 3 hijos Fabián, Sandro y Orley, era él; sin embargo aquí no se aportó la documental idónea para establecer esta situación. Y, por otra parte, la misma demandante sostuvo que no había tenido hijos con su esposo Evelio quien falleció a causa del licor, lo que claramente es contrario a lo que muestran los registros civiles de nacimiento y defunción aportados, último del que además se indicó que la causa del deceso fue “*cáncer de lengua*” (pág. 19 arch. 6 C01); en todo caso,



Dora del Socorro manifestó ante el ISS, que el causante era soltero al momento de su fallecimiento.

Ahora, dentro del segundo trámite administrativo surtido ante Colpensiones, se aportó una declaración extrajuicio rendida el 25 de febrero de 2016 por Resfa de Jesús Arenas González y Abel de Jesús Betancur Zapata, ante la Notaría 1ª del Círculo de Itagüí, en la que afirmaron que viven en la Calle 26 n.º. 67-7 y conocen a la demandante desde 1964, por ello saben que se encontraba casada con Evelio desde el 12 de julio de 1967, con quien tuvo 3 hijos de nombre Dora Elena, John Mario y Carlos Alberto Londoño Ríos, pero que el causante los abandonó en el año 1975, no obstante, durante el tiempo que hubo convivencia nunca se separaron y vivieron juntos bajo el mismo techo porque la demandante siempre dependió de él. Exactamente en idénticos términos, ese día ante la misma notaría, la demandante rindió declaración y manifestó vivir en la Cra 47 n.º 42-94 del barrio Santa María La Nueva (págs. 15-17 arch. 27.1 C01).

Se aportó el informe técnico de investigación efectuado el 27 de junio de 2016 por la Gerencia de Reconocimiento e Investigación de Dependencia Económica de Colpensiones y el Departamento de Investigaciones del Consorcio Cosinte – RM, del que se desprende que la dirección comprobada del causante era la Cra 57 n.º 42-92 piso 2 del barrio Santa María La Nueva de Itagüí, Antioquia; allí se dijo que a través de la entrevista que la demandante autorizó, afirmó que convivió con su esposo durante 8 años, con quien tuvo 3 hijos, dijo que se separaron en varias ocasiones, que él *«la dejó en el año 1975 y los últimos 2 años estuvo viviendo con ellos pero no como pareja, (...) su aporte económico era muy poco»*; también se efectuó en vía administrativa una entrevista a Celsa Tulia Hurtado Vélez, quien adujo vivir en la Cra. 57 n.º 40-167 y por ello dio fe de haber conocido a la pareja Londoño Ríos durante 30 años, quienes convivieron 8 años en un vínculo matrimonial bajo un mismo techo, sin indicar las fechas, pero aseguró que Evelio era poco responsable y les ayudaba muy poco económicamente. De manera que el consorcio investigativo concluyó que hubo una separación de cuerpos durante 16 años sin que se hubieran divorciado legalmente y que si bien compartieron techo y mesa, y el causante aportó en forma parcial hasta 2 meses anteriores a su fallecimiento, la demandante no dependía económicamente de él (págs.. 3-14, 29 archs. 27, 27.1 C01)

Hasta aquí, la demandante se contradijo con lo que ya había afirmado con anterioridad ante el extinto ISS, aquí ya admitió la existencia de sus hijos en común con el causante, aun cuando no hizo referencia a sus otros 3 hijos extra matrimoniales, pero todas las pruebas que allegó en vía administrativa a Colpensiones, coincidieron en indicar que desde 1975 el causante la abandonó a ella y a sus hijos.

En la solicitud de copia de historia laboral, indicó como residencia la cra 46 n° 45 – 9 de Medellín, y en la solicitud de reconocimiento pensional señaló como dirección la carrera 57 n° 42 – 94 de la misma ciudad (págs.. 12, 27 arch. 6 C01)

Como si lo anterior fuera poco, la demandante de ninguna forma desvirtuó en juicio las discrepancias e incoherencias anotadas, teniendo la carga probatoria de hacerlo al tenor de lo dispuesto en los arts. 164 y 167 del CGP, pues la testigo María Marlene Durango Holguín, es pensionada, dijo vivir en la Cra 57 n.º 40 - 193 Int. 203, a 3 casas cercanas de donde vivieron la demandante y su esposo en el barrio La Unión de Itagüí, motivo por el que conoce a la primera desde el año 1970 y al segundo desde 1975; sostuvo que iba a la casa de la pareja casada unas 2 o 3 veces en la semana dado que les ayudaba a cuidar los hijos, así que eran muy unidos. Señaló que el causante trabajó como mecánico en una empresa, mientras que la demandante era ama de casa. Indicó que la demandante sufría malos tratos verbales por parte del causante debido al licor, sin embargo, él era quien económicamente sostenía el hogar. Sostuvo que dentro del matrimonio, la demandante procreó 3 hijos con el causante todos nacidos en Itagüí: Dora, Carlos y Mario, y fuera del matrimonio tuvo 3 hijos más: Fabián, Orley y Sandro, quienes nacieron en Amalfi después de que ella se fue con su padrastro, pero no sabe la época. Como asistió a las honras fúnebres y al novenario de Evelio, le constó que, a quien le daban el pésame era a la demandante.

Esta declarante incurrió en varias paradojas pues, a pesar de haber indicado que la demandante nunca se separó del causante y siempre vivieron juntos, más adelante indicó que solo una vez sucedió ello porque la demandante estaba mal económicamente dado que Evelio tomaba mucho, entonces a los 8 años de haber vivido juntos, el padrastro de ella se la llevó a Amalfi aproximadamente en el año 1975, para ayudarle con los 3 niños que tuvo con Evelio, pero luego ella regresó a su casa de Itagüí con los 6 hijos.

Posteriormente dijo que Evelio también se fue por un tiempo de la casa y luego volvió a vivir con ella cuando se vio enfermo y fue hospitalizado, lo que sucedió en el año 1988 o 1990, pues vivieron como 4 o 5 años juntos, así que para cuando falleció Evelio por cirrosis, Dora vivía con él. Afirmó que en el tiempo en el que el causante estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, fue cuidado por la demandante en la clínica, mientras ella (la testigo) cuidaba de los «niños» que tuvo con Evelio ya que estaban «pequeños», porque tenían unos 6, 7 y 8 años de edad y pese a que afirmó que los 6 hijos de la demandante vivían siempre con ella, luego sostuvo que Evelio únicamente vivía con Dora, para el momento de su deceso.

En las mismas disparidades incurrió Luis Carlos Durango Holguín, testigo que es pensionado y vive en la Cra 57 n.º 40 - 193 pero en el Int. 204, sostuvo que conoció a la demandante hace unos 50 años, mientras que al causante hace unos 40 años, ellos eran casados y como eran amigos cercanos se visitaban mutuamente unas 2 o 3 veces por semana; prácticamente relató lo mismo que María Marlene, respecto de quien negó tener parentesco, cercanía o familiaridad y dijo que solo eran vecinos. Agregó que cuando la demandante se fue para Amalfi, duró viviendo allá unos 10 o 12 años, tuvo 3 hijos adicionales a los 3 que ya tenía con Evelio y, luego regresó a vivir con él para convivir juntos en Itagüí y con sus 6 hijos por unos 4 ó 5 años más, hasta que se Evelio se enfermó y falleció, lo que le consta porque su madre y hermanas (las del testigo) siempre cuidaban a los 3 últimos «niños» de Dora cuando ella se iba para el hospital, es decir, a Mario, Sandro y Orley, ya que tenían entre 8 y 10 años, mientras que los hijos que tuvo la demandante con Evelio tendrían para esa data 15 o 21 años. Informó que en las honras fúnebres y en el novenario siempre le daban el pésame a la demandante, pero luego sostuvo que nunca fue al novenario porque él trabajaba de noche.

Las testimoniales recepcionadas por el *a quo* no dan cuenta en absoluto del presunto abandono del que sostuvo haber sido objeto la demandante ante Colpensiones, como para poder concluir que Dora del Socorro estaba imposibilitada para hacer vida en común con Evelio de Jesús, porque este hubiera abandonado sin justa causa el hogar radicado en Itagüí o le impidió su acercamiento y compañía, sino por el contrario, aparentemente fue ella, quien de manera voluntaria se fue a vivir a Amalfi con su padrastro, tanto es así que tuvo la intención de conformar otro grupo familiar, tras procrear 3 hijos más, aparentemente con José Adán Ramírez Vallejo. Aunado a ello, los testigos

siempre hablan de haber cuidado «*niños*» para el momento del deceso del causante, mientras que la demandante lo atendía en la clínica, pero según los registros civiles de nacimiento que se aportaron, los hijos en común que tuvo la pareja Londoño Ríos, ya no eran niños, sino que superaban los 20 años de edad cuando falleció Evelio y, aun cuando no se allegó registro civil de los 3 hijos extramatrimoniales la demandante, según sus propios relatos, para el 2011 tenían más de 33 años de edad, es decir que por lo menos, para la data del fallecimiento del causante, tenían más de 15 años, mientras que los testigos sostuvieron que tenían menos de 10.

Adicional a ello, al constatar la forma en que estos testigos narraron las situaciones que supuestamente les constó, no se observa que sus relatos se hubieran rendido de manera natural y transparente, sino que parecen un libreto aprendido para dar su declaración, y las preguntas efectuadas por quien pidió estas pruebas, estaban encaminadas a que ambos testigos dieran las mismas respuestas, en el mismo orden y con idénticas palabras, sin que hayan cumplido la obligación de testimoniar con objetividad, espontaneidad y con la razón clara de la ciencia de su dicho, tampoco explicaron con detalle el contexto de tiempo modo y lugar en que tales circunstancias llegaron a su conocimiento al tenor de lo dispuesto en los arts. 211 y 221 del CGP, por lo que no merecen credibilidad al no haber cumplido con su deber legal de imparcialidad, sino que sus manifestaciones se exhiben contaminadas y encaminadas a favorecer sin condición alguna a la demandante.

Así las cosas, considera la Sala que todas estas situaciones narradas en cada medio probatorio no solo por la demandante en las distintas versiones dadas a lo largo de los años, sino por cada persona que dijo haber sido testigo de la presunta convivencia o relación que hubo entre Dora del Socorro y Evelio de Jesús, a la luz de lo dispuesto en el art. 61 del CPTSS, resultan contrarias a la lógica, sana crítica y buen juicio e impiden concluir que la demandante era miembro del núcleo familiar del causante para la data de su fallecimiento, máxime cuando ella sostuvo en la segunda investigación administrativa que vivió los últimos días de vida Evelio, bajo el mismo techo pero no como pareja; de manera que ningún medio probatorio ofrece la convicción y certeza, ni tiene la fuerza de persuadir acerca de la acreditación de la convivencia real y efectiva, al margen de que hubieran procreado hijos, pues lo que sí es claro es que no estaban haciendo vida en común.

Bajo las anteriores consideraciones, le asiste la razón a Colpensiones, lo que conlleva a **revocar** la sentencia apelada, para en su lugar absolver a la entidad de las pretensiones incoadas en su contra.

Sin costas en las instancias.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** en su totalidad la sentencia apelada proferida el 3 de septiembre de 2020, por el Juzgado 16 Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar **absolver** a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra por Dora del Socorro Ríos (QEPD), de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en las instancias.

**TERCERO:** Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

Magistrada ponente

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada

  
**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**  
Magistrado

[https://etbcj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/EsYdA4pq9hNGhULrtTLbQa8BSmCbJIGbRW52Vrsxp5fEvg?e=2OeoXA](https://etbcj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EsYdA4pq9hNGhULrtTLbQa8BSmCbJIGbRW52Vrsxp5fEvg?e=2OeoXA)

**Firmado Por:**  
**Luz Patricia Quintero Calle**  
**Magistrada**  
**Sala 017 Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **171735b8510a9147d0f547034d2dab1c5ea8934fc849b5a4636e6842670fbc56**  
Documento generado en 11/03/2024 03:51:14 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**